

Enero 2026
Edición No. 188

Perspectivas

Suplemento de
Análisis Político

1. *El efecto Venezuela en Nicaragua*

La operación militar ejecutada por fuerzas especiales norteamericanas la madrugada del 3 de enero, apenas iniciando el 2026, para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, y su traslado a Nueva York para enjuiciarlo, ha sacudido el tablero internacional, particularmente el latinoamericano. Después de la operación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de estado, Marco Rubio, han declarado públicamente en diferentes ocasiones que están a cargo de Venezuela y que dirigirán la “transición” en tres etapas que van desde la estabilización, sobre todo económica; la recuperación, con reconciliación nacional; y la transición y normalización del país. El control del petróleo venezolano aparece como el centro y leitmotiv de la operación militar.

A medida que van pasando los días y se van conociendo los detalles, del lado venezolano, la estructura de poder autoritaria ha quedado intacta, pero muy dispuesta a negociar con Estados Unidos en los términos que les han impuesto. Por ahora, la oposición venezolana ha quedado al margen del proceso por decisión de Washington y el régimen ha excarcelado a un pequeño grupo de personas prisioneras políticas.

Las reacciones en el ámbito internacional han sido variadas: los venezolanos en el exilio celebran la captura de Maduro; gobiernos y organismos internacionales han deplorado la acción norteamericana por sus implicaciones en relación al derecho internacional y los precedentes que establece sobre el uso de la fuerza militar. La dictadura nicaragüense encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo han reaccionado con mucha cautela rechazando públicamente la “intervención” y “secuestro” de Maduro, pero evitando mencionar directamente a Estados Unidos y Donald Trump, a la vez que excarcelaron a una veintena de personas prisioneras políticas y han elevado las alertas entre sus seguidores.



El temor al efecto dominó

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, junto con el cubano, ha sido el principal aliado político de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua desde que se instalaron en el poder en 2007. Estados Unidos los ha calificado como “enemigos de la humanidad” y los numerosos análisis elaborados siempre vinculan estrechamente el destino político de los tres países bajo la premisa del “efecto dominó”. La captura de Maduro en la acción militar de Estados Unidos a inicios de este año y los derroteros que tome Venezuela indudablemente tienen impacto en Nicaragua, especialmente en el régimen dictatorial.

Tanto en la oposición como en la opinión pública nicaragüense, existen expectativas —más o menos optimistas— de que la salida de Nicolás Maduro del poder marque el inicio hacia una transición democrática en Venezuela y contribuya a desencadenar un proceso similar en Nicaragua. Pero hay diferencias importantes a considerar.

Nicaragua no tiene el mismo peso geopolítico, económico y simbólico que Venezuela representa para Estados Unidos, pero el régimen de los Ortega Murillo lo ha convertido en una avanzadilla de los intereses chinos y rusos en Centroamérica. Desde 2018, la dictadura optó por estrechar sus relaciones políticas y de cooperación en seguridad e inteligencia con Rusia y económicas con China frente al rechazo político de la comunidad internacional, las reiteradas demandas de respeto a los derechos humanos y apertura a una transición democrática. Esta realidad no pasa inadvertida para los Estados Unidos.

La reacción inmediata de los Ortega Murillo sobre los acontecimientos en Venezuela ha sido inusualmente comedida, evitando aludir de manera directa a los Estados Unidos y existen indicios de tener canales de comunicación abiertos que eventualmente conduzcan a alguna negociación, si no es que ya están negociando.



El escenario para la dictadura dista de ser halagüeño si se consideran varios factores. La crisis por la sucesión de Ortega sigue abierta y ese momento político bien puede devenir en la continuidad o el cambio. Rosario Murillo ha avanzado en asegurar el control del poder recurriendo a purgas internas con más de 150 sandinistas apresados, entre ellos figuras reconocidas del “sandinismo histórico” y generaciones más jóvenes. Las consecuencias aún no se han manifestado plenamente, pero es innegable que existen inconformidades internas que pueden estallar en cualquier momento, atizando la crisis sucesoria. Una muestra clara que su estructura de poder está débil.

En el ámbito económico, la imposición de aranceles del 18 % ha tenido efectos negativos, incluyendo el cierre de empresas en las zonas francas y el despido de miles de trabajadores; por otra parte, la oficina comercial estadounidense recomendó aplicar de forma gradual un arancel adicional de hasta un 15 % hasta enero de 2028 en respuesta a las violaciones de derechos humanos y laborales. Estas amenazas penden como una espada de Damocles considerando que, según la recomendación, tanto los montos como el cronograma podrían modificarse si no se observan cambios en la conducta del régimen. La presión económica tuvo efecto, de manera que en las últimas semanas del 2025, los Ortega-Murillo presentaron en público a personas prisioneras políticas en condición de desaparición forzada y cambiaron el régimen de encarcelamiento de otras a arrestos domiciliarios.

A juzgar por las tibias reacciones de Rusia y China frente a lo ocurrido en Venezuela, la dictadura Ortega-Murillo saben que si no hicieron más por ese país y su socio Maduro, es menos probable que hagan algo ante una situación similar en Nicaragua. Irán, otro de sus aliados clave, atraviesa un momento crítico por las protestas de la población y las amenazas de intervención expresadas por Trump.

Escenarios inciertos y una negociación posible

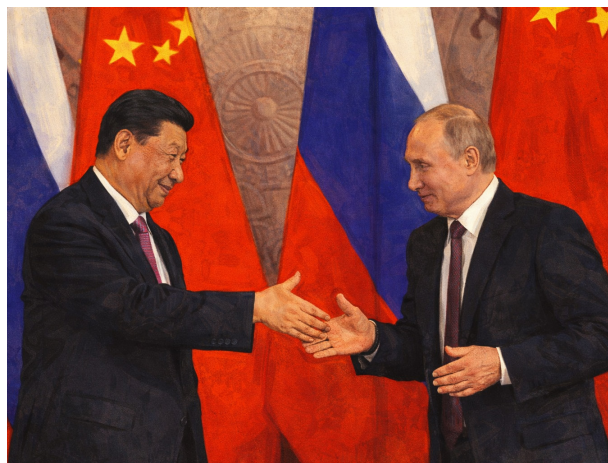
En el escenario actual, es probable que se aumenten las presiones estadounidenses al régimen nicaragüense. No es casual que en meses recientes se han incrementado las menciones a la situación del país en las redes sociales del gobierno de Estados Unidos, además que en la acusación presentada a Maduro en Nueva York, se señala el papel de Nicaragua en la ruta del narcotráfico.

Este año están previstas las elecciones de medio término para el Congreso; en el contexto reciente, los republicanos han perdido dos contiendas relevantes en las alcaldías de Nueva York y Miami; de manera que Trump y varios de sus cercanos colaboradores como Marco Rubio, necesitan posicionarse mejor exhibiendo logros concretos para mantener

abiertas sus aspiraciones de continuidad. Venezuela es una “pieza mayor”, pero todo indica que buscan otros en Latinoamérica. En ese entramado Nicaragua aparece como un eslabón fácil.

El nombramiento del canciller Denis Moncada como encargado de negocios en Washington antes de los acontecimientos en Venezuela, se interpreta como un intento de los Ortega Murillo para abrir un canal de comunicación con los Estados Unidos. Una necesidad más apremiante en el escenario actual, cuando la dictadura se encuentra ante el dilema de escoger entre el camino del aferramiento a su supuesto antimperialismo para mantenerse en el poder a cualquier costo, aunque esto signifique exponerse a mayores presiones de parte de Washington. O bien, buscar una apertura gradual para permanecer en el poder sin arriesgar sus intereses vitales, negociando con el gobierno Trump.

Además de la sucesión dinástica, el 2026 es un año preelectoral a la luz de la constitución impuesta por el régimen el año pasado; lo cual agrega un elemento más de complejidad a pesar del control que tienen sobre el sistema electoral. En las condiciones actuales y frente a un escenario de mayores presiones de parte de Estados Unidos, los intereses económicos y políticos de distintos sectores del orteguismo



“

A juzgar por las tibias reacciones de Rusia y China frente a lo ocurrido en Venezuela, la dictadura Ortega-Murillo saben que si no hicieron más por ese país y su socio Maduro, es menos probable que hagan algo ante una situación similar en Nicaragua. Irán, otro de sus aliados clave, atraviesa un momento crítico por las protestas de la población y las amenazas de intervención expresadas por Trump.

”

como la cúpula del Ejército, empresarios sandinistas y allegados, o simples intereses de supervivencia política, podrían alinearse para promover una salida pragmática con una sucesión administrada sin Rosario Murillo. Otra posibilidad es que la propia Murillo decida, muy a su pesar, someterse a las condiciones de Washington con tal de mantener el control de la estructura de poder.

La oposición es el componente más débil con el principal liderazgo en el exterior y sin una propuesta de ruta consensuada. Esto la colocaría en una posición similar a la que Estados Unidos ha asignado a la oposición venezolana. De esta manera, lo que se vive en

Venezuela muestra para Nicaragua una realidad en una especie de espejo, aunque los dos procesos políticos son distintos.

Ninguna experiencia de transición democrática ha sido lineal ni exenta de conflictos. Todo lo contrario. Para Nicaragua el factor externo, léase Estados Unidos, tendrá un papel decisivo; y a menos que los nicaragüenses convengan una salida, será ese factor externo el que marcará el rumbo y la velocidad. La oposición y la sociedad nicaragüense deben aprender, con realismo, de las complejidades del caso venezolano que en el futuro inmediato continúa cargado de incertidumbres.

2. *La nueva Doctrina Monroe y el agonizante orden jurídico internacional*

El pasado 5 de diciembre el gobierno norteamericano dio a conocer su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. En el contexto de un mundo multipolar, en el que los intereses de las grandes potencias se concentran en regiones definidas como sus “zonas de influencia”, la estrategia sitúa al continente americano como su prioridad central. En lo que respecta a Latinoamérica, este énfasis responde al argumento de frenar los flujos migratorios irregulares, la producción y envío de drogas a Estados Unidos; pero sobre todo, detener la presencia e influencia de China.

Antes de la estrategia, el gobierno norteamericano revivió la Doctrina Monroe, agregándole el llamado “corolario Trump” que pasa por alto el orden jurídico internacional establecido hace ochenta años precisamente bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Desde hace algún tiempo se afirma que el mundo asiste a un cambio de época y los hechos recientes muestran ese giro en el que las grandes potencias hacen uso de la fuerza para controlar y administrar aquellas que consideran sus áreas de influencia. En eso se empeña, por ejemplo, Rusia con Ucrania y China con Taiwán; mientras Estados Unidos busca recuperar su histórica hegemonía en el Mar Caribe. La acción en Venezuela, se inscribe en esa lógica.

Los organismos multilaterales han sido poco o nada efectivos frente a graves conflictos como el de Ucrania, Gaza, Venezuela o Nicaragua. La Unión Europea, llamada teóricamente a constituirse en un contrapeso de los Estados Unidos, comparece temerosa ante las amenazas y desplantes del presidente Trump que, alentado por su éxito en Venezuela, reanudó sus intenciones de hacerse con Groenlandia. Por su carencia de instrumentos coercitivos, el derecho internacional es poco eficaz, pero en la actual crisis del multilateralismo, provocada en buena medida por los actores más fuertes, hoy luce prácticamente inútil.



De la doctrina a los hechos

Venezuela alberga una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y la explotación y exportación de este recurso han sido el eje de su economía durante el último siglo. El presidente Carlos Andrés Pérez, en 1976, nacionalizó la industria petrolera que hasta entonces había estado mayoritariamente en manos de empresas estadounidenses, y creó la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). En 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y su alineamiento político con Rusia, China e Irán, el petróleo venezolano se convirtió en un instrumento para ampliar su influencia geopolítica apoyando regímenes aliados como los de Nicaragua y Cuba.

La cooperación petrolera entre Chávez y Ortega en Nicaragua duró aproximadamente diez años y se estima en más de 3,000 millones de dólares; estos recursos nunca ingresaron al presupuesto nacional, y más bien se convirtieron en la base para dar vida al grupo económico familiar de los Ortega-Murillo ocupando prácticamente todas las ramas de la economía nacional.

Luego de varios meses de presiones y un amplio despliegue militar en el Caribe, el gobierno de Estados Unidos realizó una operación especial para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero. El presidente Donald Trump justificó la acción señalando que Maduro era un narcoterrorista, argumento que había repetido durante varios meses, pero también dejó claro que el interés prioritario es el petróleo venezolano. La presidenta investida, Delcy Rodríguez que cuenta con el visto bueno estadounidense, refiriéndose a la captura de Maduro y su esposa, afirmó que “el narcotráfico y los derechos humanos eran la excusa; el motivo era el petróleo”. Sin embargo, poco después un comunicado oficial anunció

que Venezuela proveerá de inmediato 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos, un equivalente de 2,800 millones de dólares. Los rápidos resultados obtenidos por la administración Trump en Venezuela, aun permaneciendo la estructura de poder autoritaria, muestran la anuencia a colaborar de los nuevos gobernantes venezolanos.

Tanto en la estrategia de seguridad como en la narrativa de los hechos en Venezuela es indudable el sello de Donald Trump, quien ha afirmado que dirigirá Venezuela hasta que se produzca una transición, a la vez que el secretario de estado, Marco Rubio, delineó el proceso en tres momentos de estabilización, recuperación y normalización definitiva. Se trata de la decisión explícita de recuperar el control de América y reafirmar ante el mundo un poder de carácter individual transaccional.

¿Son prescindibles la democracia y los demócratas?

La transición hacia la democracia no ha transcurrido tal como la esperaban los venezolanos después de la captura de Nicolás Maduro. Hay un cambio en la cabeza del régimen, pero básicamente permanece intacto y ahora cuenta con el aval de los Estados Unidos. Dos días después de su captura, Maduro y Cilia Flores comparecían como acusados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York mientras Delcy Rodríguez se juramentaba como presidenta interina.

La expectativa general era que la acción estadounidense posibilitara el regreso de Edmundo González Urrutia para asumir la presidencia que le fue arrebatada por el fraude electoral en julio. Por el contrario, el presidente norteamericano descartó esa posibilidad legitimando la sucesión por Delcy Rodríguez.

Versiones periodísticas indican que una de las razones fue la recomendación de la CIA advirtiendo que González Urrutia y María Corina Machado no podían garantizar el control y la estabilidad interna en Venezuela durante una transición.

Con esa decisión, queda fuera de duda que las motivaciones de Trump son prioritaria —si no exclusivamente—, económicas y, en consecuencia, negocia con quien garantice sus intereses independientemente de su carácter democrático. El control del petróleo venezolano aparece como eje central en esa lógica, a pesar de que las mismas compañías petroleras se mostraron escépticas, poco dispuestas a invertir y no establecieron ningún acuerdo para respaldar el plan del presidente norteamericano.

Por su lado, el régimen venezolano se mueve en dos direcciones complaciendo las demandas de Estados Unidos y dando pequeñas señales de apertura como la excarcelación de un grupo de personas prisioneras políticas, mientras mantiene una retórica revolucionaria de cara a sus seguidores y mantiene el control sobre la población al interior del país. La estructura de poder permanece prácticamente intacta y el cambio ha sido de figuras a pesar que una reforma legislativa anunciada recientemente,

apunta a un rediseño del modelo social y político, cuyas características todavía se desconocen.

El futuro de Venezuela es muy incierto y depende en gran medida de los acuerdos que se establezcan entre el gobierno norteamericano y las nuevas cabezas del régimen. La constitución venezolana establece que ante la ausencia definitiva del presidente, la presidenta encargada dispone de un plazo de hasta 180 días para convocar elecciones. Esa es la ruta legal institucional; pero hay más interrogantes que certezas. Por ahora, los pasos anunciados por Estados Unidos tienen sentido desde la perspectiva de sus intereses, pero no propiamente desde la democrática. El desenlace tiene varios caminos y todos son complejos.



3. *Tempestades electorales en Honduras y Costa Rica*

El 2026 inició para Centroamérica con dos tempestades electorales en curso. La crisis instalada en Honduras desde las votaciones de noviembre pasado no ha cesado a pesar que ya se anunció como ganador a Nasry Asfura, el candidato que goza del aval norteamericano. La polarización política se acentuó en el país debido a los retrasos en el conteo de los votos, la divulgación de los resultados y los cuestionamientos sobre la credibilidad de los integrantes del órgano electoral.

La situación ha derivado en una disputa abierta entre los poderes estatales con la presidenta Xiomara Castro disponiendo el recuento de los votos, mientras otros actores políticos hondureños se oponen. Asfura aprovechó una visita a Washington para fotografiarse con el secretario de estado, Marco Rubio, ratificando así el respaldo de Estados Unidos; mientras en Honduras, el país está a las puertas de nuevas disputas entre los partidos políticos por la presidencia del Congreso Nacional.

En Costa Rica, la campaña electoral entró en su fase final marcada por una alta polarización que revela el deterioro democrático del país y augurando el continuismo del gobierno actual. En las encuestas de opinión más recientes, la candidata oficialista Laura Fernández aventaja con amplio margen a otros candidatos en la intención de voto; ha desistido de participar en debates públicos y en varias oportunidades ha expresado opiniones provocando molestias entre los demás contendientes.

El presidente Rodrigo Chaves ha sido señalado de intervenir en la contienda electoral para favorecer a la candidata de su partido; mientras que en las semanas más recientes se han producido incidentes en los que se señala a algunas instituciones públicas de excederse en sus funciones en perjuicio de candidatos, o bien, para distraer la atención de la ciudadanía frente a la falta de consistencia de la propuesta electoral.



Algunos analistas pronostican que el 1 de febrero, fecha señalada para las votaciones, la competencia se resolverá en primera vuelta; sin embargo, algunos más cautos consideran que el voto de los indecisos, estimado en 45 %, puede modificar esas previsiones. Para la población en general, los temas más urgentes son la inseguridad y violencia que se ha extendido a todo el país, las dificultades económicas y la falta de empleo; así como las limitadas oportunidades para las generaciones jóvenes.

Recientes informes como el Estado de la Nación han señalado los riesgos que enfrenta hoy la democracia e institucionalidad costarricense y la importancia de atender a tiempo problemas clave como el de la educación, antes que el país se sume a la tendencia autoritaria que envuelve a Centroamérica.

Tempestades electorales en Honduras y Costa Rica

1

La polarización política se acentuó en el país debido a los retrasos en el conteo de los votos, la divulgación de los resultados y los cuestionamientos sobre la credibilidad de los integrantes del órgano electoral.

2

La presidenta Xiomara Castro dispone el recuento de los votos, mientras otros actores políticos hondureños se oponen.

3

El país está a las puertas de nuevas disputas entre los partidos políticos por la presidencia del Congreso Nacional.



1

La candidata oficialista **Laura Fernández** aventaja con amplio margen a otros candidatos; ha desistido de participar en debates públicos y en varias oportunidades ha expresado opiniones que han generado molestias entre los demás contendientes.

2

Algunos analistas pronostican que en las votaciones la competencia se **resolverá en primera vuelta**; sin embargo, algunos más cautos consideran que el voto de los indecisos, estimado en 45 %, puede modificar esas previsiones.

3

Temas más urgentes: inseguridad y violencia que se ha extendido a todo el país, las dificultades económicas y la falta de empleo